tema del mes

Una propuesta cuestionable para reformar la universidad

El informe elaborado por una comisión de expertos para reformar la universidad, por encargo del Ministerio, es objeto de un detallado análisis crítico en este Tema del Mes. En los siguientes artículos se desvelan las conexiones ideológicas entre el borrado de la LOMCE y el informe de los expertos. También se advierte que las medidas propuestas ya han sido introducidas en otros países, apuntando claramente hacia la privatización del sector, y que uno de sus objetivos principales es reducir la presencia de los funcionarios en la universidad. Por último se alerta de la escasa atención que se presta al personal laboral y se analizan las objeciones planteadas por dos de los expertos.

Julio Serrano Gracia

Secretario de Coordinación de Acción Sindical,
Salud Laboral, Universidad e Investigación
FE CCOO

La propuesta de reforma universitaria y la LOMCE

Julio Serrano

Secretario de Coordinación de Acción Sindical,
Salud Laboral, Universidad e Investigación
FE CCOO

La universidad española ha mejorado mucho en los últimos treinta años, produciéndose importantes avances cualitativos y cuantitativos. Podríamos afirmar que disponemos de una universidad pública de acceso generalizado, científicamente homologada en el contexto internacional, abierta a la colaboración con nuestro entorno social y económico, y políticamente alineada con los valores humanos, éticos y democráticos.

PERO ES verdad que, y más en el actual contexto, debemos plantearnos la necesidad de seguir mejorando la calidad del Sistema Universitario Español (SUE). Para ello hemos de detectar sus problemas y debilidades, establecer un diagnóstico consensuado y elaborar las propuestas que nos permitan continuar avanzando desde la participación y el debate abierto a la comunidad universitaria y buscando el más amplio de los consensos. Por tanto, son necesarias las propuestas para resolver los problemas; pero también es imprescindible disponer de un marco estable que permita planificar y desarrollar la actividad universitaria a largo plazo porque no es bueno para el sistema que se cambie cada vez que cambia el partido en el poder.

En todo caso, el Gobierno del PP ha decidido impulsar una nueva reforma del SUE. La fórmula utilizada por el MECD para iniciar esos trabajos fue encargar a una comisión de “expertos”, formada casi exclusivamente por académicos, sin representación de la sociedad y sin presencia de estudiantes o PAS, un informe que, según el propio ministro, será objeto de un cuidadoso análisis y un amplio debate, por lo que suponemos que será la base sobre la que girará la citada reforma.

El contenido del informe no es novedoso y coincide en algunas de sus propuestas con documentos patrocinados por entidades como la Fundación BBVA (Universidad, universitarios y productividad en España. Julio de 2012) o un informe similar elaborado por otra comisión de expertos nombrada por la Generalitat catalana.

Todas las críticas coinciden en señalar que el informe no es fruto de una evaluación rigurosa del SUE ni tiene en cuenta los resultados de la última reforma. Se sustituye el rigor de los datos por la utilización de todos los tópicos, clichés y lugares comunes que han presidido el debate público sobre la universidad y su función en los últimos años. Desde la famosa "excelencia" hasta la sostenibilidad, pasando por los conceptos de la economía del crecimiento y la innovación, la globalización, la internacionalización, la calidad, la financiación condicionada a objetivos, la rendición de cuentas, la empleabilidad, la competitividad, etc.

Conceptos que profundizan en la orientación de un modelo de universidad al servicio del mercado, justo lo contrario de lo que, en nuestra opinión, es necesario en estos momentos: una universidad al servicio de la sociedad en la que se refuerce su carácter de servicio público, evitando las tendencias privatizadoras.

Resulta sorprendente en este sentido que se afirme en el informe que "es indudable que las universidades no preparan a los jóvenes suficientemente para encontrar un trabajo adecuado al título que reciben" y a la vez que respecto "a la calidad de la formación que proporciona el SUE, las pruebas no son tan concluyentes, dado que las comparaciones internacionales son más difíciles de realizar". Parece que los autores están convencidos, aunque no tengan pruebas concluyentes, de que la insuficiente calidad de la formación que proporciona el SUE es más relevante para las elevadas tasas de subempleo y de desempleo entre nuestros titulados que el agotado modelo productivo que hemos sufrido en nuestro país desde el famoso "que inventen ellos".

Todo esto contrasta con la buena valoración que tienen en Europa muchos de los profesionales formados en las universidades españolas. Pero lo que más sorprende es la contradicción que supone hablar de la mala formación de nuestros alumnos y el absoluto desprecio que existe por la docencia en el documento de los expertos.

Las únicas propuestas que se realizan en este apartado (la colaboración institucional entre universidad y empresa para detectar las necesidades formativas e investigadoras que requieren los empleadores; la incorporación de profesionales de prestigio en el mundo de la empresa al diseño de los títulos o del mapa universitario...) vuelven a incidir en lo único que parece importarles: poner la universidad al servicio de "los mercados".

La primera función de la universidad según la LOU es la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. Sin embargo, para los autores del informe solo importa la que podríamos llamar investigación productiva.

Tampoco compartimos las propuestas que se hacen para mejorar el gobierno de las universidades. En nuestra opinión suponen una clara agresión a la autonomía universitaria y no garantizan un mejor gobierno de las universidades. La composición del Consejo de la Universidad que se propone y el procedimiento para la elección del rector (designado directamente por el citado consejo, ante el que responde) son, como señalan los autores del voto particular, reformas que no encajan en la Constitución porque atentan contra la autonomía universitaria. Nos preocupa que se politice el órgano de dirección de la universidad y que la participación de las empresas en la dirección de la universidad la mercantilice todavía más.

Igualmente, rechazamos el excesivo poder que se otorga al rector, que tendría la capacidad de nombrar decanos y directores de centro, en detrimento de los órganos colegiados y de la participación democrática de la comunidad universitaria en la elección de sus órganos de gobierno.

Es también muy discutible la apuesta por reducir la oferta de titulaciones, fundamentalmente de las universidades públicas. Los expertos parecen compartir la afirmación del informe de la Real Academia de Ciencias Exactas de que "es preciso eliminar algunas carreras superfluas y de mala calidad y mejorar las existentes. Hay demasiados planes de estudio y centros que carecen de justificación", sin que sea necesario esperar a ninguna evaluación de las previstas por el sistema.

Por otro lado, la supuesta falta de demanda de algunas titulaciones, sin ningún análisis detallado, también les sirve para argumentar el exceso de oferta. Igualmente, discrepamos de la necesidad de reducir el número de universidades, su reorganización o fraccionamiento, y de la posible eliminación o fusión de facultades y departamentos en función de aspectos económicos exclusivamente, como parece que se propone en las "recomendaciones sobre la oferta de títulos y la dimensión del SUE".

Es inaceptable que la reflexión sobre la necesidad de garantizar una adecuada financiación se centre rápidamente en aumentar la financiación privada (matrículas, mecenazgo o contratos con empresas) y no en que es necesario incrementar la financiación pública. Según el informe OCDE -Education at a glance- 2012 (los "expertos" citan el OCDE-2011), España invierte mediante financiación pública el 1,1% del PIB en la universidad, mientras que la media de financiación pública tanto en la OCDE como en la EU21 es del 1,4% del PIB. Situarnos en la media significaría aumentar en más de un 25% la financiación pública.

La financiación pública, los recursos económicos que aporta el Estado importan mucho, aunque no a todos por igual, por su efecto redistributivo. Los recortes que se pretenden consolidar provocan pérdidas de equidad y peores resultados educativos. Un ejemplo claro es la subida de las tasas universitarias, especialmente en los másteres universitarios, y el recorte en becas. Ambas medidas están impidiendo la incorporación a la universidad del estudiantado con menos recursos económicos y provocando el abandono de quienes habían iniciado sus estudios y ahora tienen problemas para hacer frente al incremento de los precios públicos.

Si, como se reitera, de verdad se parte del convencimiento de que la mejor defensa de la educación pública es el aumento de su calidad, no parece buen camino la senda de la fragmentación, la desregulación, la precariedad y los recortes.

Pero, además, hacerlo para que la universidad se ponga al servicio de los mercados contribuye poco al desarrollo económico, cultural y social de una sociedad que debe reducir la cada vez mayor desigualdad social. Introducir más reglas del mercado en la educación superior generará más desigualdades y más competencia entre las universidades. Tendremos un mapa de universidades de primera, de segunda e incluso de tercera división. Algo que ya existe para los autores del informe y que, lejos de corregir, pretenden consolidar.

Apuesta ideológica

LA REFORMA liberal-conservadora que se nos propone coincide con el carácter mercantilizador y privatizador de la reforma universitaria europea que no es únicamente un peligro o un riesgo que podría ser conjurado con mayor o menor dificultad, sino que constituye el centro mismo de los objetivos de la reforma. Se trata de una apuesta ideológica por un cambio de modelo de las universidades públicas españolas que da continuidad a la reforma educativa que se propone en la LOMCE.

La FECCOO trabajará con toda la comunidad universitaria para impedir que nos impongan una reforma que no servirá para mejorar nuestra educación superior y que muy probablemente la empeore en muchos aspectos.